



LULA Y LA BATALLA POR LA DEMOCRACIA EN BRASIL



Dossier N°5 del Tricontinental
Junio de 2018



Giorgia Prates/Brasil de Fato

Ciudad de Curitiba, Paraná, Brasil

En el edificio de la Policía Federal, el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva se encuentra preso. Es una de las mayores referencias populares de los últimos tiempos. La suya es una prisión arbitraria e injusta, con el objetivo de impedir su candidatura a la presidencia del país en las elecciones que tendrán lugar en octubre de este año. En las encuestas de intención de voto, Lula lidera los escenarios de la disputa presidencial; inclusive después de preso, mantiene el doble de intención de voto que el que figura en segundo lugar.

Frente a la cárcel, una multitud se encuentra alojada en el campamento Marisa Letícia, nombre dado en homenaje a la esposa de Lula, que murió el año pasado; que cuenta con una organización propia, compartida entre los participantes que cumplen diversas actividades: la seguridad del campamento, la distribución de alimentos, la limpieza, la organización de actividades culturales y debates políticos con personalidades de todo el mundo que vienen a realzar ese espacio con su solidaridad. Por sobre todo, todos los días, se organizan por la mañana y por la noche para decir en alto y con buen sonido: “Buenos días presidente Lula” y “Buenas noches presidente Lula”. Son los centinelas contra quienes quieren silenciar la democracia.

Entre el campamento y la cárcel hay un abismo. Uno representa la democracia, la otra representa el golpe.



Giorgia Prates/Brasil de Fato

Historia: ¿Cuáles son los antecedentes del “golpe suave” en Brasil?

Se evidencia una ruptura en el proceso democrático brasileño que tiene como consecuencia el realineamiento del país a intereses externos, más precisamente, de los Estados Unidos, en lo que entendemos como una nueva ofensiva neoliberal, un proceso que se despliega no solo en Brasil sino en toda América Latina.

Los ataques más sistemáticos al gobierno de la presidenta Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores (sucesora del presidente Lula), tienen inicio a mediados de 2013, luego de las llamadas movilizaciones de junio, en las que millares de jóvenes tomaron las calles para rechazar el aumento del pasaje del transporte público y, después de una fuerte represión policial del gobierno del estado de São Paulo (dirigido por un partido de derecha, el Partido de la Social Democracia Brasileña - PSDB), las manifestaciones aumentaron a más de un millón de jóvenes en todo el país, con pautas difusas, pero que traían al centro de la discusión cuestiones como la mejoría de la calidad de los servicios públicos, el rechazo a la clase política y a la corrupción, además del reclamo central contra el aumento de los pasajes del transporte público.

Movilizaciones que, en principio, fueron condenadas por la gran prensa, en especial, por el Grupo Globo y otros sectores de derecha; pero que luego, ante la posibilidad de disputarlas

y orientarlas hacia una crítica conservadora del gobierno que comenzaba su desgaste y deslegitimación, fueron apoyadas por los propios grandes medios que convocaron a la población a salir a las calles.

A partir de la victoria de la presidenta Dilma Rousseff – del Partido de los Trabajadores – a fines de 2014 para un segundo mandato, las fuerzas de oposición en conjunto con el Grupo Globo y sus medios vinculados, intensificaron el proceso de desestabilización política, sin aceptar los resultados de las urnas, infligiendo diversas derrotas y bloqueos al nuevo gobierno a través del parlamento. Y en seguida, se abrió un proceso contra la presidenta, acusada de un delito de responsabilidad fiscal (delito que más tarde fue desmentido por la pericia del Senado, lo cual fue reconocido públicamente por los líderes de la derecha en entrevistas a la prensa), culminando en su impeachment, considerado como una forma de golpe parlamentario, llamado también “golpe suave”.

De acuerdo con la profesora Ermínia Maricato (USP), el año 2013 marcó el inicio de la caída de la hegemonía política del PT. Ese declive se fue profundizando hasta 2016 cuando la presidenta Dilma Rousseff fue destituida por el Congreso Nacional luego de una campaña de oposición jurídica/mediática, donde “las fuerzas que construyeron el ciclo democrático no supieron renovarse durante todo el período y, por sobretodo, perdieron el contacto directo con las bases sociales”, fueron sorprendidas con las movilizaciones y no consiguieron desarrollar acciones frente a ese nuevo escenario que se diseñaba.

El nuevo golpe trajo rápidamente una agenda antipopular. Con la aplicación de una contrarreforma laboral que precariza las condiciones de trabajo y debilita sobremanera a los sindicatos, un profundo ajuste fiscal que reduce recursos dirigidos a las políticas sociales, congelándolos por 20 años y una política externa que somete al país a una condición pasiva, entregando sus recursos naturales, como los cambios en las leyes referentes a explotación del Pre-sal, y el desmantelamiento de la mayor empresa estatal del sector, la Petrobras, así como la criminalización de las luchas populares y de la izquierda como un todo. En una frase, ellos buscan acabar no solo con todos los avances conseguidos en los gobiernos del PT desde 2003, sino también con las conquistas históricas de la clase trabajadora, como las principales leyes laborales, que estaban vigentes desde 1943.

Pero ¿Cuáles son los motivos para este golpe contra la democracia brasileña? ¿Qué lleva a la prisión de una de las principales referencias populares y líder en intención de voto para la presidencia del país? ¿Y por que los movimientos populares y sindicales están empeñados en la defensa de Lula y en la denuncia del riesgo que amenaza a la joven democracia brasileña? Este dossier, el quinto publicado por el **Tricontinental. Instituto de Investigación Social** intenta responder a estas preguntas.



Giorgia Prates/Brasil de Fato

La ola rosa

En América Latina y el Caribe asistimos en las últimas décadas (desde el año 2000 en adelante) a un avance de las fuerzas progresistas y movimientos de rechazo al recetario del Consenso de Washington, políticas impulsadas por los Estados Unidos y sus aliados para forzar a los países de la región a un proceso de apertura económica irresponsable, privatizaciones, desregulación y flexibilización de las leyes laborales. Políticas que llevaron a la crisis económica y social a muchos de nuestros países. La década de 1980, debido a esas políticas, fue llamada la década perdida. Y los 90 no fueron mejores. La desigualdad social reinó, incluso en condiciones de democracia representativa.

Victorias importantes en toda América Latina al final de la década de 1990 e inicios de los años 2000 trajeron una reacción contraria a estas políticas neoliberales. La victoria de Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela, los Kirchner en Argentina, Michelle Bachelet en Chile, Evo Morales en Bolivia, Fernando Lugo en Paraguay, Rafael Correa en Ecuador, Tabaré Vázquez y José Mujica en Uruguay, así como Lula y Dilma en Brasil, son ejemplos de esa “ola rosa” que se recorrió el continente.

Los nuevos gobiernos reconocieron que no sería posible mantener sus políticas progresistas, si las mismas quedaran

acotadas a sus fronteras nacionales. Necesitaban desarrollar un nuevo tipo de integración regional. Fue lo que impulsó la reconstrucción de políticas regionales y de integración latinoamericana, la construcción de nuevos espacios como la UNASUR (Unión de Naciones Sudamericanas) en 2004, la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) en 2008. Esa fue también la razón por la cual Brasil amplió la convergencia del IBSA (que agrupaba a India, Brasil y Sudáfrica) hacia la constitución de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), espacio promovido desde 2006, fortaleciendo así las relaciones internacionales del eje Sur - Sur, por fuera de la esfera de influencia de los Estados Unidos.

En Brasil, el PT instaló una agenda que no rompía por completo con las políticas neoliberales, en una compleja composición política y de clases, pero que permitió mejoras sustanciales para el pueblo y para la clase trabajadora, como el aumento de la formalización del trabajo, aumento real del salario mínimo, combate a la miseria extrema, inserción de millones en el mercado consumidor con acceso a bienes públicos como luz y agua, disminución de los índices de desigualdad, inserción de la juventud de las periferias en universidades públicas y privadas, entre otras acciones. Todo ello, no obstante, sin afectar las ganancias de la elite brasileña y del sistema financiero. Tampoco se enfrentó al monopolio de los medios de comunicación.

Entre las políticas de recuperación del rol económico del Estado, la estrategia del gobierno fue utilizar a la Petrobras

como una herramienta de desarrollo interno, promoviendo el crecimiento de la inversión pública en la economía y en investigación y desarrollo (I+D), con políticas de contenido local para la explotación del petróleo y por fin, la reforma de la ley de explotación petrolera, después del descubrimiento del Pre sal por parte de Petrobras en 2007 a partir de sus tecnologías innovadoras. Así, retiró del mercado la explotación y apropiación de estos recursos, colocando a la Petrobras como operadora única e imponiendo regalías mayores que eran reinvertidas en salud y educación.

En el ámbito internacional, la integración regional buscada por la UNASUR y CELAC fue desarrollada con una agenda propia, por fuera de los intereses de los Estados Unidos y sus aliados. Los BRICS, con todas sus limitaciones, sirvieron como una alternativa de desarrollo y financiamiento para los países con la creación de su propio banco de desarrollo, buscando cambiar el eje geopolítico determinado por los Estados Unidos, a través del FMI y el Banco Mundial.



Giorgia Prates/Brasil de Fato

Guerra híbrida

Con el empeoramiento de la crisis de 2008 y el aumento de la disputa geopolítica mundial, que colocaba a la hegemonía de los Estados Unidos en jaque, este país desarrolló una nueva ofensiva global para retomar el control de la región, actuando sobre los gobiernos y países que amenazaban su autoridad. Así, el golpe en Honduras en 2009 abrió un nuevo período en América Latina. Demostró que los Estados Unidos usarían todos los medios para recuperar el comando en esta región; lo que se observó, desde México hasta Argentina, en su influencia en las políticas económicas y sociales, así como su apoyo a cambios de gobierno, de formas diferentes, en cada país.

La nueva estrategia utilizada por los Estados Unidos con el fin de imponer su nueva agenda neoliberal sobre los gobiernos progresistas y los pueblos de la región tomó la forma de la llamada “guerra no convencional”, método detallado en el *Manual para guerras no convencionales de las Fuerzas Especiales de los Estados Unidos*, que define entre sus objetivos “explotar las vulnerabilidades políticas, militares, económicas y psicológicas de potencias hostiles, desarrollando y apoyando fuerzas de resistencia para alcanzarlos objetivos estratégicos”.

La “guerra híbrida”, argumenta el periodista Pepe Escobar, especialista en conflictos internacionales, ha sido usada efectivamente contra los países que componen el bloque de

los BRICS. Primero imponiendo pesadas sanciones y una campaña de demonización sobre uno de los países más fuertes del bloque, Rusia, con ataques a su moneda, disminución de los precios del petróleo y la promoción de la llamada “revolución de los colores” en las calles de Moscú. La presión sobre Rusia y China vino también por el cerco a Eurasia a través de la instalación de bases militares estadounidenses, además de los movimientos de la OTAN hacia el Este. Para atacar a Brasil, sus métodos fueron más sutiles y complejos con esta nueva modalidad de guerra. Pepe Escobar, analizando la actuación en Brasil, destaca que es esencial como primer paso influir en las clases medias despolitizadas para avanzar con los métodos de desestabilización política de un gobierno, invirtiendo en la promoción de pequeños grupos de jóvenes en las redes sociales que fomenten el descontento popular, en un juego bien organizado con los grandes medios, fabricando y difundiendo sus verdades, señalando a Rousseff y a Lula como los políticos más corruptos de Brasil. Así, el país fue sujeto a un tipo no convencional de guerra por las fuerzas conservadoras y sus aliados extranjeros.

Como observó el profesor Alexandre Aragão de Albuquerque, investigador del Grupo Democracia y Globalización de la Universidad Estadual de Ceará (UECE), dos acciones básicas se ponen en práctica en este proceso de desestabilización en Brasil. La primera busca crear y reforzar la percepción de la población sobre la legitimidad de la causa de derrocar al adversario, por ejemplo, “la lucha contra la corrupción”. La segunda se desarrolla simultáneamente, buscando carcomer la

percepción de la población sobre la legitimidad del oponente en el poder – o sea el gobierno –, para demonizarlo, esto es, identificarlo como el causante de todo el mal vigente.

Esta arquitectura se monta por la articulación de los grandes medios – Grupo Globo –, el Poder Judicial, los parlamentarios opositores y los grupos financiados externamente, creando *fake news* e incitando el odio de una clase media despolitizada contra un gobierno democráticamente electo.

El caso contra Lula

Entre los métodos de la guerra no convencional, el que ha sido utilizado y denunciado en el caso brasileño es el conocido como *lawfare* que puede ser entendido como una guerra jurídica, asimétrica, mediante el uso ilegítimo de la justicia, con fines económicos y políticos.

Este concepto se traduce, para el profesor de derecho Carlos Lodi, de la Universidad Estadual de Rio de Janeiro (UERJ), como “el proceso de usar la violencia y el poder inherentes a la ley para producir resultados políticos como apartar a un adversario mediante el uso abusivo del sistema jurídico en sustitución de los procesos electorales constitucionalmente vigentes”.

El instrumento usado con el fin de atacar al PT y a sus líderes fue la Operación Lava Jato [lavado a chorro (de autos), por el nombre de uno de los locales donde comenzó la investigación], iniciada en 2014. Una operación encabezada por un juez de primera instancia de Curitiba, Sergio Moro, con el supuesto objetivo de investigar las denuncias de corrupción en los contratos entre Petrobras y grandes empresas. La Operación Lava Jato se volvió la herramienta principal de deslegitimación y persecución política a la presidenta Dilma y a Lula. La intención política de la “Lava Jato” quedó en evidencia cuando el juez Moro filtró a la prensa, de forma ilegal, el contenido de escuchas telefónicas de la jefa de Estado Dilma Rousseff, atentando contra la seguridad nacional, con el claro objetivo de crear una presunción de culpa con relación a los involucrados e impidiendo el nombramiento de Lula como ministro de Estado perturbando el ambiente político.

Los efectos de la Operación Lava Jato sobre la Petrobras también fueron muy dañinos, debilitando a la compañía, promoviendo un plan de privatizar parte de sus operaciones para mutilar un importante instrumento de política económica. Con el bloqueo de los contratos de la Petrobras fueron retirados más de US\$ 38.000 millones de la economía brasileña solo en 2015 con un impacto importante en toda la cadena productiva y con la consecuencia de más de cuatro millones de desempleados.

El objetivo principal se transformó en el intento de vincular a Lula con esta investigación sin contar con pruebas, manipulando así una operación de combate a la corrupción

para promover juicios políticos y persecución. Se buscó de esta manera deslegitimar a Lula, imputándole el título de culpable antes de siquiera haber sido juzgado.

Entre las ilegalidades cometidas en este proceso se cuentan: el intento de llevar por la fuerza a Lula a declarar en 2016, finalmente frustrado por la reacción popular cuando la policía pretendió llevarlo a Curitiba; las escuchas telefónicas ilegales a él y a sus abogados; el uso judicial sin ninguna otra prueba de delaciones hechas por empresarios y otros acusados que a cambio se vieron favorecidos por la disminución de sus penas (lo que se conoce como delaciones premiadas); entre otras arbitrariedades. Estos son algunos ejemplos del ataque orquestado desde el Poder Judicial.

Para el profesor de ciencia política Luis Felipe Miguel de la Universidad de Brasilia (UNB), los mecanismos para acusar a Lula funcionaron como una triangulación, donde la primera punta venía de una información contraria al ex presidente, filtrada por la Policía Federal o por el Ministerio Público; y, en seguida, los medios de comunicación colocaron esa filtración como principal tema de la semana. La segunda punta se hizo en sentido inverso, con un medio de comunicación anunciando alguna “primicia” seguida por una investigación iniciada por el Ministerio Público o la Policía Federal que daba respaldo oficial a la información. Y la tercera punta del triángulo fueron los sitios web dedicados a *fake news*, alimentando a la militancia de derecha con versiones más simples y agresivas de las noticias, teniendo un papel importante los pequeños

mensajes e imágenes caricaturescas que difundían esas mentiras produciendo un ambiente tóxico.

Al no haberse encontrado en la Operación Lava Jato hecho alguno que incriminara al ex presidente Lula, además de la producción cotidiana de falsas noticias y “primicias”, la justicia de Curitiba enfocó su campaña de incriminación en una posible donación a Lula de un apartamento (apodado triplex) de propiedad de la empresa OAS en la ciudad de Guarujá, en la costa del Estado de São Paulo, como retribución por los contratos adjudicados por la Petrobras. Esta causa se inició a partir de la “delación premiada” de José Aldemario Pinheiro Filho, ex presidente de la OAS, quien se encontraba preso hacía más de un año y en todas sus declaraciones anteriores había negado la participación de Lula en cualquier esquema de corrupción para, luego de un fabuloso acuerdo de reducción de condena, acusar al ex presidente aunque sin presentar ninguna prueba.

Basado en la acusación de Pinheiro, el juez Sergio Moro sentenció al ex presidente Lula en primera instancia por el caso del triplex, por corrupción pasiva – que ocurre cuando un servidor público recibe favores a cambio de la práctica de un acto de oficio –, y por lavado de dinero. En este juego de cartas marcadas, los jueces de segunda instancia del Tribunal Regional Federal 4 reforzaron la pena, dando prioridad al proceso de Lula, en un tiempo récord – con la lectura de 250.000 páginas en seis días por parte del revisor del proceso – lo que equivaldría a leer 2.000 páginas por hora sin dormir y durante

seis días corridos, como ironizó el sociólogo Emir Sader.

Por la necesidad perentoria de desgastar la imagen de Lula con el objetivo de impedir su candidatura presidencial, lo que sería frenar el avance del proyecto de realineamiento del país a la hegemonía estadounidense, enseguida de que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) negara el pedido del ex presidente de responder en libertad (habeas corpus), el juez Sergio Moro emitió la orden de captura de Lula. Se valió para ello de una decisión del Supremo Tribunal Federal (STF) de 2016, que habilita el encarcelamiento del acusado condenado en segunda instancia, aunque no se hayan agotado todos los recursos de la defensa y el fallo, en ese sentido, no sea en firme.

Sábado 7 de abril, Sindicato de Metalúrgicos de la región de ABC, muy cerca de São Paulo, que fuera determinante en la lucha por la redemocratización del país en la década de '70 bajo el liderazgo de Lula, por entonces trabajador metalúrgico de la región. En el salón del sindicato, símbolo de la democracia, el ex presidente es llevado preso – bajo protesta de los millares de manifestantes que allí estaban – por orden del Poder Judicial, cada vez más encumbrado como un símbolo de la elite.



Giorgia Prates/Brasil de Fato

La defensa de Lula

Lula es acusado de ser dueño de un apartamento donado por la empresa contratista OAS. Para el Frente Brasil de Juristas por la Democracia, ninguna de las personas que testificó afirmó ningún hecho que vincule la propiedad del inmueble con Lula. Lo único que pudo confirmarse es que él visitó el apartamento una sola vez, nada más que eso. Pero es necesario entender que el crimen no es tener un apartamento, sino recibir ese apartamento como ventaja indebida por haber practicado, en tanto funcionario público, un acto de corrupción pasiva. El juez Moro tendría que identificar el acto específico cometido por el ex presidente Lula a partir del cual, él recibiría como retribución el triplex, pero el juez no consigue hacerlo y no tiene documentación alguna que compruebe que el apartamento es del ex presidente.

Por otra parte, la sentencia de Moro ignora las declaraciones de 73 testigos de la defensa y de la acusación que encuentran inocente a Lula y sólo toma en cuenta la palabra de dos acusados que ya estaban condenados y cambiaron sus declaraciones originales. Cuando la defensa de Lula cuestionó las contradicciones de la sentencia; la primera vez, obtuvo como respuesta de Moro que no era necesario probar que Lula era el propietario del triplex ni que la construcción y reforma del inmueble hayan sido hechas con recursos desviados de la Petrobras. Vale recordar que el alegato de que los recursos

desviados eran de la Petrobras, fue lo que justificó que el proceso saliera de la justicia de São Paulo y fuera a parar a manos del juez Sergio Moro en Curitiba. Una condena hecha sin pruebas, apenas la convicción del Poder Judicial y de los grandes medios fueron suficientes para condenar a Lula.

Para que haya corrupción pasiva, afirma el profesor Carlos Lodi, el ex presidente tendría que haber practicado algún acto, en el ejercicio del cargo, que constituyese una ventaja ilegal en favor de la contratista OAS, a cambio de la ventaja indebida obtenida. Sin embargo, la justicia no tuvo éxito en comprobar que Lula haya tenido cualquier participación en la celebración o negociación de los contratos con la Petrobras.

Aunque el inmueble fuera de Lula, lo que no se pudo verificar, continúa diciendo Lodi, al considerar la acusación por lavado de dinero y no estando el triplex a su nombre no habría pruebas sobre el bien donde se utilizó el lavado de dinero ¿qué fue lavado entonces? y ¿qué se quiso ocultar? Toda la acusación carece de sentido.

De esta manera, el golpe iniciado con el impeachment de la presidenta Dilma, sigue con el intento de impedir la candidatura de Lula a la presidencia, en una clara destrucción de la democracia, que viene siendo desmantelada día a día. En palabras de Ivana Jinkings, “la ruptura institucional tiene ahora una piedra angular, el encarcelamiento del ex presidente Lula”.

El golpe suave en perspectiva

Lo que es evidente es que el intento por desmoralizar y bloquear la candidatura de Lula persigue dos objetivos. El primero es quitarle al pueblo la posibilidad de decidir sobre las medidas de políticas públicas adoptadas después del golpe. El segundo objetivo es el realineamiento del país con las propuestas de restricción y pérdidas de derechos sociales y laborales y de sumisión al mercado financiero y a la hegemonía norteamericana.

Este segundo objetivo, tiene a su vez otros tres grandes vectores:

1. Alineamiento incondicional con los Estados Unidos en todos los temas, foros e instancias del sistema internacional;
2. Adhesión irrestricta a la globalización neoliberal;
3. Involucramiento ostensible en la campaña internacional para deponer al presidente venezolano Nicolás Maduro y aplastar la Revolución Bolivariana, devolviendo el poder a la derecha local, aliada con los EE. UU.

En este sentido, los Estados Unidos tienen un papel principal en los procesos de desestabilización de los gobiernos progresistas en América Latina desde el golpe en Honduras en 2009; particularmente han fomentando e incentivado a los nuevos

gobiernos de derecha a comprometerse en el derrocamiento del proceso bolivariano en Venezuela. Así, bajo presión de las fuerzas norteamericanas, los militares de Brasil, Perú y Colombia hicieron ejercicios militares conjuntos a fines de 2017 (AmazonLog17) con el argumento de prever situaciones de emergencia humanitaria en las fronteras con Venezuela. Según la analista Ana Esther Ceceña, del Observatorio Geopolítico Latinoamericano, se trata de una operación para reforzar el cerco militar sobre Venezuela. El golpe suave en Brasil forma también parte de esta política.

Las transformaciones operadas en Brasil después del golpe suave de 2016 se expresan en el desmantelamiento de los derechos sociales y en el rompimiento del pacto establecido en el proceso de redemocratización contradiciendo así todas las premisas previstas en la Constitución ciudadana de 1988.

La reforma de la legislación laboral (aprobada en 2017) y de las pensiones; la aprobación del proyecto que congela el presupuesto en áreas como salud y educación por los próximos 20 años; una tasa de desempleo que alcanza a más de 13 millones de personas; el aumento del hambre y de la miseria; así como el aumento de la tasa de mortalidad infantil, que disminuía desde hace 13 años, son los resultados más visibles de este proceso para el pueblo.

Por otra parte, el gobierno de Temer ha ofrecido grandes beneficios a las corporaciones multinacionales y a las elites brasileñas. Uno de los objetivos del golpe, el Pre-sal, supuso

cambios en la ley de explotación del petróleo; la Petrobras dejó de ser operadora única de sus recursos y ya no está obligada a asumir al menos el 30% de la explotación como determinaba la ley anterior. También hubo una reducción del contenido nacional mínimo que permitía el desarrollo local en el sector, que ahora beneficiará a las compañías extranjeras de petróleo, que ya vienen participando de las licitaciones de bloques de explotación de petróleo y gas en Brasil.

Un cambio en la ley de explotación de los recursos naturales que muestra también un giro en las relaciones exteriores brasileñas hacia la subordinación a las exigencias políticas y económicas de los Estados Unidos.



Giorgia Prates/Brasil de Fato

Lula como símbolo

Lula es un símbolo vivo de que la clase trabajadora puede llegar efectivamente al gobierno. Así, su prisión política implica el avance de un proyecto conservador contra el pueblo y la democracia que prolongan los objetivos del golpe suave contra Dilma Rousseff. Para los movimientos populares, la lucha por su liberación y la defensa de su derecho a ser candidato, así como la lucha por elecciones libres y democráticas en 2018 son objetivos fundamentales para derrotar a las fuerzas golpistas en las urnas y abrir la posibilidad de revertir las reformas neoliberales.

Para los trabajadores de la Petrobras, según la FUP (Federación Única de Petroleros, entidad de los trabajadores ligados a la CUT, una de las mayores centrales sindicales del país), es evidente que la prisión de Lula representa uno de los capítulos del golpe que tiene relación directa con la entrega del petróleo al capital extranjero. Afecta directamente a los empleos y al desarrollo nacional, por eso en las asambleas con toda la categoría de trabajadores, han sido aprobadas huelgas contra el desmantelamiento que se impulsa en Petrobras así como en defensa del ex presidente Lula.

En su carta dirigida al pueblo brasileño, el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) declaró su apoyo a la candidatura de Lula a la presidencia, entendiendo que esa

defensa representa la lucha contra el golpe y los deseos del pueblo brasileño por cambios en este escenario de crisis. Explicita que los responsables de la crisis y la inestabilidad política son “el capital financiero internacional; los medios de comunicación – en especial el Grupo Globo –, que alimentaron y estimularon los movimientos golpistas y fascistas; y el Poder Judicial, que, por un lado, coloca sus intereses y privilegios encima de la Constitución y, por el otro, premia con la impunidad a toda la represión y violencia que se descarga contra los pobres.”

El Frente Brasil Popular (una articulación de varios movimientos populares, sindicales y partidos políticos de izquierda) ha construido comités populares en defensa de la democracia y de la libertad de Lula por el país, promoviendo la movilización y la denuncia del golpe en curso.

En este contexto, las tensiones sociales están en alza. El monstruo del odio y del neofascismo creado por el Grupo Globo, el Poder Judicial y las fuerzas conservadoras del país anda suelto. El asesinato de la militante popular y concejala de Rio de Janeiro por el PSOL (Partido Socialismo y Libertad), Marielle Franco, no puede ser interpretado fuera de este cuadro de tensión y de respuestas violentas y represivas desde el poder. Su denuncia de los desmanes del Estado y del genocidio que se lleva adelante contra el pueblo afrodescendiente y de la periferia, le costaron la vida. En similar dirección, los disparos contra la caravana de Lula en 2017, en un intento de detener su paso por los estados brasileños, así como los disparos contra el campamento Marisa Leticia en abril de 2018 por grupos

fascistas, muestran este clima de violencia. En todos estos casos los culpables no han sido encontrados ni juzgados.

Aún así, el número de participantes en el campamento Marisa Leticia continúa aumentando, con caravanas llegando de todos los estados del país. La comunidad de vecinos que rodea el campamento – que al comienzo fue atacada por los medios por los supuestos horrores que esa ocupación traería –; hoy se inserta en la dinámica de los acampados; con actos de solidaridad; cediendo espacios de sus casas y baños; lavando la ropa de los participantes y ayudando con la alimentación; además de la participación en los debates y eventos culturales. Su hostilidad ahora se transformó en solidaridad. Es así como el futuro se abre hacia adelante: no como un gobierno golpista, corrupto y autoritario, sino como lo que se construye diariamente en el campamento Marisa Leticia.





Giorgia Prates/Brasil de Fato

Carta del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) al pueblo brasileño

Brasil vive una profunda crisis económica, política, social y ambiental, resultado de la crisis internacional del capitalismo y de la propia incapacidad de este sistema para solucionar las contradicciones que genera. En este contexto, las salidas autoritarias, como los golpes y ataques a la democracia, han sido la fórmula adoptada para garantizar una violenta ofensiva neoliberal, que quita derechos de los trabajadores y trabajadoras, al mismo tiempo que secuestra y subordina el Estado a los intereses de grandes grupos empresariales.

Es necesario tener claridad e identificar quiénes son los responsables por esta crisis y por la inestabilidad política en la que vivimos para enfrentarlas: el capital financiero internacional, los medios de comunicación, en especial el Grupo Globo, que alimentaron y estimularon los movimientos golpistas y fascistas; el Poder Judicial, que por un lado, coloca sus intereses y privilegios por encima de la Constitución, y por otro, premia con la impunidad toda represión y violencia contra los pobres.

Este momento exige de las fuerzas progresistas unidad de acción y esfuerzo para construir un Proyecto Popular para Brasil, capaz de enfrentar los problemas estructurales de nuestro país, combatiendo la miseria y el desempleo; recuperando el desarrollo; enfrentando la cuestión de la

vivienda y la movilidad urbana en las ciudades; garantizando la salud y educación públicas y de calidad; llevando a cabo la reforma agraria en el campo; protegiendo los bienes comunes de la naturaleza e impidiendo su privatización; y recuperando la soberanía nacional.

Por eso, convocamos al conjunto de la sociedad para construir y participar del Congreso del Pueblo Brasileño, organizado por el Frente Brasil Popular, para que este sea el espacio de discusión y organización en torno a los problemas del país y de las medidas estructurales necesarias para superarlos.

También reafirmamos nuestra convicción de la inocencia del presidente Lula, defendemos su derecho a disputar las elecciones presidenciales y ante esta prisión política resultado de un proceso ilegal e ilegítimo, ¡exigimos su libertad!

Por todas estas razones, el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra, declara públicamente su apoyo a la candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva, por entender que ella representa la lucha contra el golpe y los deseos del pueblo brasileño de cambio en este escenario de crisis que nos asola a todos.

No permitiremos el olvido, ni pactaremos con la impunidad; por eso exigimos solución y justicia para el asesinato de nuestra compañera Marielle, así como el de tantos jóvenes pobres víctimas de la represión. Que su ejemplo de vida continúe inspirando a los jóvenes, a las mujeres y a los trabajadores y trabajadoras en estos tiempos de represión y autoritarismo. En

su memoria, ¡ni un momento de silencio, sino el compromiso y la lucha de las trabajadoras y los trabajadores rurales Sin Tierra contra el golpe, contra la retirada de derechos y de la libertad, por un país más justo, igualitario y soberano!

¡Lula Libre! ¡Marielle Vive!

¡Luchar, construir Reforma Agraria Popular!

—*Dirección Nacional del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra*

São Paulo, 12 de mayo de 2018



Giorgia Prates/Brasil de Fato

Manifiesto al pueblo brasileño del Frente Brasil Popular

1. Un hombre está siendo perseguido y sufre injusticias porque ha probado, junto al pueblo brasileño, que es posible construir una sociedad más libre, justa, fraterna y solidaria en nuestro país. Quieren extinguir los derechos políticos de ese hombre: Luiz Inácio Lula da Silva, el primer presidente hijo del pueblo y defensor de los trabajadores y de los más pobres. Quieren impedir el derecho del pueblo de votar libremente por quien representa a los millones de brasileños que sufren hoy con el desempleo, la reducción del salario, la revocatoria de derechos históricos y el desmantelamiento de las políticas que promovieron la superación del hambre y la reducción de la desigualdad en nuestro país.

2. La persecución contra Lula es impulsada por sectores del sistema judicial, especialmente la Justicia Federal, el Ministerio Público y la Policía Federal de la [Operación] Lava Jato, además del Tribunal Regional Federal 4, asociados a los medios más poderosos y opresivos del país, con el Grupo Globo a la cabeza. El objetivo de esa persecución, arbitraria, opresiva e ilegal, es no permitir que el pueblo pueda votar para que Lula sea presidente una vez más.

3. Ellos no solamente quieren encarcelar al ciudadano Lula. Quieren prohibir la causa que él representa y defiende: la inclusión social, la promoción de los derechos del pueblo, de

las mujeres, niños, negros, indígenas, de la población LGBT, de las personas con necesidades especiales; la valorización de los salarios y la generación de empleos; el apoyo a las pequeñas y medianas empresas, a la agricultura familiar y a la reforma agraria; la defensa de la soberanía nacional y la construcción de un país más igual y más justo.

4. Para excluir a Lula de las elecciones presidenciales, inventaron mentiras y promovieron un proceso arbitrario, atribuyéndole crímenes que jamás fueron probados, porque Lula siempre actuó dentro de la ley, antes, durante y después de haber sido presidente de Brasil. Para condenarlo, sin crimen y sin pruebas, no tuvieron escrúpulos en violar las más elementares garantías constitucionales y transgredir los principios democráticos fundamentales.

5. Lula es inocente y continúa desafiando a la Lava Jato a probar que algún día haya recibido ilícitamente siquiera diez centavos, de quien quiera que sea. Rompieron su sigilo bancario y el de sus hijos, hicieron una inspección de las cuentas del Instituto Lula, intervinieron sus llamadas telefónicas, lo condujeron a la fuerza e ilegalmente a dar declaraciones, cercenaron su defensa, negociaron declaraciones con criminales a cambio de beneficios penales y financieros, pero no encontraron ninguna prueba de los crímenes de que lo acusan. Lula ya probó su inocencia y continúa desafiándolos a probar su culpa.

6. Por tener un compromiso histórico con nuestro país y nuestro pueblo, el 7 de abril de 2018 Lula cumplió la orden

de detención expedida de forma ilegal y arbitraria. Incluso habiendo recibido ofertas de asilo en países democráticos, prefirió quedarse aquí y encarar a sus acusadores mentirosos. Como cree que aún se hace justicia en este país, aguarda el juzgamiento del mérito de los recursos de su defensa.

7. Incluso encarcelado, Lula continua como candidato a la presidencia de la República, porque no acepta ver pasivamente que el país sea administrado con incompetencia económica, política y social. No acepta la entrega del patrimonio nacional a intereses privados ni que Brasil deje de lado su soberanía valientemente conquistada. Es para mantener esta situación de sufrimiento del pueblo y de ruina del país que los poderosos, los golpistas y el Grupo Globo quieren mantener a Lula preso y eliminarlo de las elecciones. Pero el pueblo, la ley y la Constitución están del lado de Lula.

8. La Legislación Electoral garantiza que Lula pueda ser escogido como candidato a la presidencia por su partido y que su candidatura pueda ser inscrita hasta el 15 de agosto, con su nombre y su fotografía en las urnas electrónicas y con el derecho de participar en la propaganda electoral en radio y televisión. Solamente después de eso, la Justicia Electoral podrá decidir sobre su elegibilidad, caben además recursos, si fuera necesario, ante el Supremo Tribunal Federal. Estos son los hechos, quieran o no quieran los comentaristas del Grupo Globo, pues ellos no hacen la ley ni representan al verdadero Brasil, solo repiten las palabras de su dueño.

9. Desde donde se encuentra, Lula mantiene su fe en Brasil, en que puede volver a ser una de las mayores economías del mundo, puede crecer y crear empleos, y cree que el pueblo brasileño puede recuperar su autoestima, la soberanía nacional y tomar decisiones en función de sus propios intereses, superando el complejo de vende patria, como sucedió en su gobierno.

10. Para eso, es necesario recuperar la industria nacional, rescatando el papel estratégico de la Petrobras, preservando la Eletrobras y los bancos públicos, como el Banco de Brasil, el BNDES y la Caixa. Es necesario invertir cada vez más en educación, ciencia, tecnología e investigación, para que Brasil vuelva a ser competitivo internacionalmente. Y es necesario recuperar los programas sociales que garantizan la transferencia de renta, apoyo a la agricultura familiar, a la reforma agraria, a la vivienda popular, además de la política de valorización de los salarios, para que el pueblo pueda participar y recoger los frutos del crecimiento económico.

11. Brasil sólo va a superar la profunda crisis en la que se encuentra por medio de elecciones libres y democráticas, con la participación de todas las fuerzas políticas y de todos los candidatos, inclusive Lula, respetando la autonomía de los partidos, la legitimidad de las precandidaturas ya presentadas y preservando el esfuerzo por la convergencia programática y política del campo democrático. Sólo así tendremos un gobierno con legitimidad para hacer de Brasil, nuevamente, un país mejor y más justo. Y sólo así podremos debatir y crear un nuevo orden en la comunicación, sin monopolios,

democratizando el acceso a la información y a los medios de expresión.

12. Brasil quiere volver a ser un país en el que todos tengan sus derechos reconocidos, en el que no haya odio, prejuicios ni violencia como la que asesinó a Marielle y a Anderson y que masacra cotidianamente a los pobres, los negros, las mujeres, los campesinos y los indígenas.

13. Brasil quiere volver a ser un país del tamaño de sus sueños. Volver a ser el país que cultivó la fraternidad, el respeto a las diferencias y el diálogo internacional por la paz, como lo fue con Lula presidente. Quiere volver a tener confianza en el presente y esperanza en el futuro, sin miedo de ser feliz.

¡Por elecciones libres y democráticas!

¡Lula Libre!

¡Marielle Presente!

¡Por el derecho de Lula a ser candidato!

¡Por el derecho del pueblo a votar libremente!

—*Frente Brasil Popular*

Tricontinental: Institute
for Social Research *is an
international, movement-driven
institution focused on stimulating
intellectual debate that serves
people's aspirations.*

Tricontinental. Instituto de
Investigación Social *es una
institución promovida por los
movimientos, dedicada a estimular
el debate intelectual al servicio de
las aspiraciones populares.*

the **trico**ntinental.org